

EL PAÍS

ARCHIVO

EDICIÓN
IMPRESA

VIERNES, 11 de julio de 1997

VIOLENCIA EN EL PAÍS VASCO

ETA secuestra a un concejal del PP y amenaza con matarlo mañana si el Gobierno no acerca a los presos

Los partidos convocan una manifestación en Bilbao para cuatro horas antes de que termine el ultimátum

AITOR GUENAGA BIDAURRAZAGA | Bilbao | 11 JUL 1997

Archivado en: Manifestaciones contra ETA Amenazas Amenazas concejales Ermua Miguel Ángel Blanco Garrido Ayuntamientos Manifestaciones contra terrorismo Ministerio del Interior Secuestros terroristas VI Legislatura España PP Gobierno de España Amenazas terroristas Secuestros Administración local Ministerios Bizkaia

ETA secuestró ayer al concejal del PP Miguel Ángel Blanco Garrido, soltero, de 29 años, y amenaza con asesinarle en el plazo de 48 horas (mañana a las cuatro de la tarde vence el ultimátum) si el Gobierno no traslada a cárceles vascas a los presos etarras. El edil abandonó su domicilio en Ermua (Vizcaya) a las 15.20, tras almorzar con sus padres, y no llegó a su trabajo en la empresa Eman Consulting, en Eibar (Guipúzcoa). El portavoz de HB, Floren Aoiz, ya advirtió al ministro del Interior el pasado 1, tras la liberación de José Antonio Ortega Lara por la Guardia Civil, que tuviera cuidado en no caer en "la borrachera de la eficacia policial", porque a ese estado podría sucederle "la resaca". El lehendakari José Antonio Ardanza conminó anoche a ETA, "en nombre del pueblo vasco, al que legítimamente representamos", a que deje "inmediata e incondicionalmente en libertad" a Miguel Ángel Blanco.

Un comunicante anónimo, en llamada al diario *Egin* sobre las 17.30, informó que se había secuestrado a un concejal del PP en Ermua y que el coste de su libertad era la vuelta de todos los presos de ETA al País Vasco antes de las 16 horas de mañana. Para esta misma hora, los partidos de la Mesa de Ajuria Enea han convocado una manifestación en Ermua. La Mesa se reunirá esta misma mañana y para las 13 horas está convocada una concentración ante el Ayuntamiento de Bilbao, al igual que otras previstas en los demás municipios de España. Nueve días después de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, la banda terrorista ha atacado con este secuestro directamente al PP para forzar al Gobierno a variar su política penitenciaria.

El presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, tras visitar a la familia, aseguró que "para el Partido Popular todos los secuestros son iguales" y lo calificó de 11 venganzas intolerables. Tras hablar con el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, reafirmó que el Ejecutivo mantendrá su política penitenciaria y no cederá al chantaje.

Iturgaiz indicó que ETA pretende con este nuevo secuestro "presionar" y poner entre la espada y la pared al Gobierno de José María Aznar y al ministro del Interior. Frente a esto, el dirigente popular ha pedido a la sociedad que salga de nuevo a la calle y que se movilice para pedir la liberación inmediata de Blanco.

Los padres de Miguel Ángel Blanco Garrido comenzaron a sospechar que algo raro ocurría al ver que su hijo no regresaba de su trabajo. El padre se enteró del secuestro por boca de los periodistas. La prensa se había apostado en la puerta del edificio del domicilio familiar para recabar información.

La empresa Eman Consulting está a pocos kilómetros del domicilio del edil popular. Blanco Garrido salió de su domicilio sobre las nueve de la mañana para dirigirse, como todos los días, a su trabajo. La policía sospecha que los terroristas pudieron haber interceptado al concejal del

Partido Popular en el camino que lleva de su casa, donde comió con sus padres, a la empresa. "La familia está destrozada", dijo Iturgaiz tras visitar a los padres.

Sospecha

La sospecha de que algo había pasado se confirmó a las 17.30, cuando un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de la banda terrorista reivindicó el secuestro. Esta persona aseguró que la condición para la liberación de Blanco era el acercamiento inmediato a las cárceles vascas de los más de 400 presos de ETA dispersos en otros penales españoles. El comunicante fijó el plazo para "ejecutar" al concejal del PP a las 16.00 de mañana. Media hora más tarde, sobre las 18.00, responsables del diario *Egin* llamaron a la Ertzaintza y a la sede del PP en Bilbao para informar del nuevo secuestro de ETA. Tras tener conocimiento de la llamada anónima a *Egin*, los responsables de la Ertzaintza informaron a través del centro de coordinación al resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Ertzaintza, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía establecieron anoche un centro de crisis en el cuartel general de la policía vasca en Bilbao para controlar la investigación.

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, dio cuenta al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quien más tarde se trasladó al palacio de La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, José María Aznar.

El juez Manuel García Castellón, de guardia ayer, se trasladó por la tarde a su despacho de la Audiencia Nacional para hacerse cargo del caso.

Atutxa ha pedido a los secuestradores "que no cumplan su amenaza" y a ETA que "reflexione, que no siga cometiendo crímenes, que no obstruya la solución a problemas que deben resolverse con diálogo, no con crímenes.

ETA tiene prisa para forzar al Gobierno a variar su política con los presos etarras y, de paso, apagar la euforia desplegada desde el 1 de julio por los responsables policiales y políticos tras la liberación del funcionario José Antonio Ortega. Un dato evidencia esta prisa: el hecho de que ETA no diera el habitual plazo de seguridad para que el comando estuviera a salvo, ya que se atribuyó el secuestro a las pocas horas de cometerlo.

Éste es el tercer secuestro en que ETA amenaza con dar muerte al rehén en un plazo prefijado si no se cumplen sus exigencias. Antes sucedió con el ingeniero de la central nuclear de Lemoniz José María Ryan, en enero de 1981, y con el capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, en octubre de 1983. En el caso de Ryan, el *precio* era la paralización de las obras del complejo nuclear, mientras que en el de Barrios la pretensión era que TVE emitiera un comunicado sobre los detenidos por el asalto al cuartel de Berga.

El anterior político secuestrado por ETA fue el hoy diputado del PP Javier Rupérez, a quien la rama *político-militar* raptó en 1979 para forzar al Gobierno a excarcelar a un puñado de presos. El secuestro de Blanco ocurrió a 15 kilómetros del zulo donde estuvo recluido Ortega Lara, y tanto la liberación de éste como la de Cosme Delclaux, José María Aldaya y Julio Iglesias Zamora se produjeron en una zona de unos 20 kilómetros de diámetro.